EL EXPERIMENTALISMO ARGENTINO. NOTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO.

Dante Avaro[1]
CONICET-Arg.

Resumen.

La realidad política argentina es vertiginosa, aun así, siempre resulta necesario contar con el auxilio del análisis coyuntural. En este sentido el artículo propone un esquema metodológico que toma en cuenta factores estructurales o de largo plazo. Para ello, el autor introduce el concepto de "experimentalismo", concepto que captura la dinámica política de corto plazo condicionada a la lógica política que regula los intereses políticos de largo plazo. El trabajo propone una modelización para la relación entre oferta de bienes público y matriz de pago a las lealtades políticas, lo que permite describir un funcionamiento específico para la democracia argentina. El mismo lleva por nombre "poliarquía en zona vedada". Si bien este último no explica el asunto del experimentalismo argentino, sí permite comprender, dada el actual escenario político, por qué razón cobra relevancia.

Palabras clave
Argentina, democracia, actores políticos, análisis político, análisis de coyuntura

[1]Pesquisador. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Abstract

The Argentine political reality is vertiginous, for that reason, a situation analysis is necessary. In this sense, the article proposes a methodological scheme that considers structural or long-term factors. For this, the author introduces the concept of "experimentalism". This concept captures the short-term political dynamics conditioned to the political logic that regulates long-term political interests. The work proposes a modeling for the relationship between public goods and payment to political loyalties, which allows describing the specific functioning of Argentine democracy: "polyarchy in a restricted area". While the latter does not explain the issue of Argentine experimentalism, it does allow us to understand why it becomes relevant today.

Keywords
Argentina, democracy, politicians, political analysis, situation analysis

introducción

Comprender lo que sucede en Argentina resulta, para propios y extraños, todo un desafío cognitivo. Todavía retumba, en varios de los corrillos internacionales de decisión, aquella frase que afirma que "hay cuatro clases de países: desarrollados, en vías de desarrollo, Japón, y Argentina". La idea que está detrás de esta icónica frase atribuida al profesor Simon Kuznets ya compone, para mayor desazón entre su población, parte de su acervo cultural. Así, la caracterización sobre Argentina "que teniendo todo, no tiene nada" bifurcó un sendero: o libera fuerzas místicas en torno a un refugio que no se tiene, o ancla todo análisis alrededor de un concepto que no existe: el excepcionalismo negativo. Pero si la palabra excepcional se caracteriza por su sentido positivo (*i.e.* sobresaliente y así se usó para el caso estadounidense), no es su antónimo el que debe usarse para describir la situación argentina, sino más bien la palabra experimentalismo.

Nuestra comprensión contemporánea sobre los experimentos le debe mucho a los aportes realizados por el recientemente fallecido profesor Bruno Latour. Gracias a sus investigaciones resulta posible discutir el rol que desempeñó la idea de experimento en la modernidad y, en tanto concepto, su alcance en las

ideas de progreso. Mención especial merece la propuesta analítica del mundo como experimento (Latour 2004) y sus implicancias para la política actual. En esta línea, procederé a caracterizar qué entiendo por experimento político, tras lo cual definiré experimentalismo. Finalizo esta presentación con una descripción general sobre el objetivo general de este artículo.

Dentro del campo de los experimentos políticos me interesan aquellos que cuentan con protocolo, no porque resulten los únicos relevantes, sino porque son los que aquí requieren atención. A partir de la consolidación de las *poliarquías* (uso este concepto en el sentido propuesto por Dahl, 1972) los experimentos políticos en las democracias han estado sujetos a dos protocolos bien definidos, aunque, resulta necesario precisar, no siempre acoplados. Los dos protocolos son: por un lado, los derechos humanos y, por el otro lado, los criterios y reglas procedimentales (ancla y guía, se puede afirmar, de las democracias liberales). Se podría decir que los protocolos no sólo permiten "controlar-evaluar" los experimentos, también sirven como guías o conjunto de restricciones para echarlos a andar. Y en este último sentido resulta necesario mencionar una restricción muy presente en los experimentos democráticos: las leyes de funcionamiento de la economía. En conjunto, los protocolos sirven para poner en funcionamiento el experimento y contar con parámetros para enjuiciarlo (políticamente). Sintetizo para avanzar. En efecto, en democracia un experimento político consiste en iniciativas políticas (o más técnicamente "políticas") que reclaman para sí la etiqueta de novedosas (aunque no "nuevas", en sentido estricto del término, *Cf.* Groys, 2005) o innovadoras, cuya implementación está delimitada-guiada y sus resultados enjuiciados a través de la existencia de protocolos. Esta definición resulta útil para delimitar el asunto del experimentalismo argentino en cuanto a su temporalidad: las últimas cuatro décadas.

Partiendo de la definición de experimento político con protocolo defino al experimentalismo como un conjunto de creencias lo suficientemente desarticuladas para que se convierta en doctrina, pero asaz atractiva para que los políticos echen mano de ellas, fortalezcan así su voluntad y traccionen, por tanto, sus decisiones. Así, el experimentalismo es tanto menos un movimiento que una improvisación, una forma desviada del concepto de experimento que termina valorando más al acto de experimentar que su objetivo subyacente: la implementación de "políticas". El experimentalismo no es necesariamente una corriente de pensamiento, ni doctrina, tampoco una ideología, es, ante todo, un *modus vivendi* que arrastra a los actores políticos, como si de un campo de fuerzas se

tratara, a considerar más valioso y útil sobre ofertar experimentos que sopesar prudencialmente la utilidad de las políticas. El experimentalismo tiene, en contextos de demandas ciudadanas persistentes, propiedades miméticas y contagiosas. El experimentalismo arrastra de manera creciente a los actores políticos hacia un campo de fuerzas centrípetas con un precio de entrada muy barato (el placer que provoca el experimentar por sí mismo) con un costo de salida cada vez más oneroso (puesto que para salir se requiere un -*gran*- experimento). En consecuencia, el experimentalismo se retroalimenta y crece, hasta convertirse en el *modus vivendi* de una sociedad política. Para expresarlo con contundencia y poca elegancia: el experimentalismo es la situación en donde la mayoría de los políticos hacen del experimento en sí mismo el único horizonte de la política. El experimentalismo es puro movimiento, pero no puede ofrecer novedad. Lo cual no excluye que los políticos no obtengan alguna utilidad a través de esta forma de actuar, algo sobre lo que volveré más adelante y se convertirá en el eje principal de este trabajo.

En el apartado anterior afirmé que el experimentalismo es una forma desviada del experimento. Y, repito, el experimentalismo constituye una situación en donde la mayoría de los políticos hacen del experimento en sí mismo el único horizonte de la política. Dejándola, así, huérfana de futuro, porque está repleta de experimentos cuyo único valor radica en la experimentación *per se.* Constituye un campo de fuerzas centrípeto puesto que resulta muy atractivo a los actores políticos ingresar en él y, por otra parte, demasiado oneroso salir. Por esa razón el experimentalismo es un *modus vivendi.* Y es uno en donde la mayoría de los actores políticos se dan cuenta de que el experimentalismo resulta una especie de *cul-de-sac,* pero aun así todos recaen en él, porque nadie, en definitiva, quiera estar fuera del *status quo* que garantiza permanecer dentro del actual juego democrático: la experimentación de experimentar. Sin embargo, experimentos sin horizonte no sirven ni a los ciudadanos, y por esa razón tampoco, a largo plazo, a los políticos. Por tanto, en Argentina todos los involucrados en el juego democrático se dan cuenta de este asunto, y así surge, como en la parábola del rey desnudo, la siguiente cuestión: entonces, ¿quién no se da cuenta? Esto da lugar a las siguientes preguntas: ¿Por qué en Argentina resulta difícil mover la arena política más allá del experimentalismo? ¿Por qué el experimentalismo argentino atrae todas las energías políticas? O, más directamente, ¿por qué la democracia argentina ha quedado prisionera del experimentalismo? El presente texto ofrece un marco metodológico para abordar estas preguntas.

BIENES PÚBLICOS *VS.* PAGO DE LEALTADES POLÍTICAS: UNA MODELIZACIÓN

El modelo que ofreceré se basa en tres proposiciones que presentaré, rápidamente; luego las expongo con detalle. Sigo aquí, en líneas generales, la propuesta teórico-metodológica desarrollada por el politólogo Bruce Bueno de Mesquita y colaboradores (Bueno de Mesquita *et al.* 2003; Bueno de Mesquita and Smith 2013). Primera, llegar al gobierno y ejercerlo requiere de una extensa red de amigos o, de manera más precisa, de una amplia base piramidal de "elegibles" (*Cf.* Avaro 2020, cap. 1). Segunda, el gobernante tiene que asegurar, para los que le acompañan, una matriz de reciprocidad (directa o indirecta) que varía en función del lugar que ocupen sus beneficiarios en la citada pirámide. Tercera, todo gobierno se ancla en la disponibilidad y acceso al recurso "dinero". A continuación, se impone una descripción más precisa.

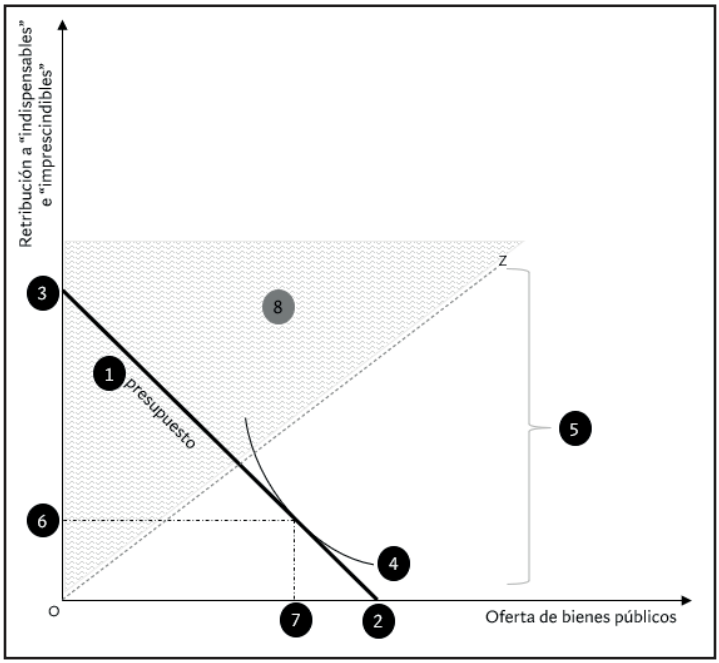
P1. La democracia es un régimen de gobierno, es decir, las decisiones autoritativas recaen en gobernantes que se convierten en responsables de algo frente a alguien. Sin embargo, aún bajo un sistema presidencialista fuerte (como es el caso argentino) el presidente necesita delegar el poder para ejercer poder. Expuesto de manera descarnada, pero realista: la única manera de mantener y acrecentar el poder consiste en delegarlo de manera apropiada, aunque esto implique, como veremos más adelante, enormes riesgos. Delegar el poder es una formulación elegante para afirmar que, desde la perspectiva del gobernante, resulta imperativo "compartir" el poder, tanto de manera formal como informal. Así, mientras más delegue, más extensa su red de poder. No hay forma de mantener y conservar el poder si no acrecienta su esqueleto, sus músculos y, así, su fuerza. Y la fuerza es, como apuntó acertadamente Julien Freund (1968), medible y cuantificable; lo que resulta, por tanto, útil para defenderse de aquellos que quieren o pretenden disputarle el poder. En síntesis: obtener, ejercer y conservar el poder requiere de otros que a su vez necesitan a otros y así sucesivamente, lo cual remite a la próxima proposición.

P2. En una democracia el gobernante tiene que lidiar con el apoyo de tres grupos poblacionales: los "imprescindibles", los "indispensables" y los "intercambiables" (las etiquetas propuestas originalmente por Bueno de Mesquita and Smith 2013, son: *esenciales, influyentes* e *intercambiables,* respectivamente). Necesita de ellos no sólo para llegar al poder, también para mantenerse en él.

En una *poliarquía* los intercambiables son los votantes (electores si se prefiere), un conjunto anónimo y, por tanto, indiferenciable (*Cf.* Przeworski 2010); aquí lo relevante es su cantidad. Contar cabezas, obtener una mayoría ganadora, resulta un asunto necesario para acceder al poder, pero siempre constituye un éxito contingente por tratarse de una naturaleza cambiante y volátil. Desde la perspectiva del gobernante son intercambiables, porque son anónimos en la contabilidad del poder. La matriz de reciprocidad democrática (*responsiveness*) que se establece entre el gobernante y los intercambiables se ancla en la disponibilidad y oferta de bienes públicos, cuya cantidad y calidad resulta enjuiciada ciudadanamente durante los procesos electorales. Por otra parte, los imprescindibles, en cambio, ni son anónimos ni un conjunto indiferenciado, prima en ellos cierta cualidad. Los imprescindibles son poseedores de un vector de talentos (conocimiento tácito, astucia, arrogancia, carisma, autoridad sobre dominios específicos, don de conducción sobre aspectos cruciales de la vida en conjunto, etc.), es decir, cualidades que resultan valiosas para ejercer el poder delegado-compartido, también para acrecentarlo. Sin ellos el poder resulta, en definitiva, débil, hasta raquítico. Así, en tanto poseedores de talentos escasos, resultan individuos altamente cotizables en el juego democrático, lo que significa que no son fáciles de conseguir, tampoco de ser conservados o retenidos bajo la égida del gobernante. Sin embargo, aun así, son imprescindibles, puesto que el gobernante sabe que si no delega el poder en ellos no acrecentará el poder. En efecto, el gobernante sabe que la expansión del poder se funda en un riesgo: la posibilidad que los imprescindibles (si no obtienen la reciprocidad adecuada) se pasen a la facción contraria. Este es el núcleo central de la frase que Diógenes Laercio le atribuye a Aristóteles: "¡Oh, amigos míos! No hay ningún amigo". En este sentido, para el gobernante cada pérdida de "un" imprescindible en sus filas resulta en una amputación de su cuerpo político; varias pérdidas, en cambio, ya es una señal de debilidad irreparable, un claro anuncio sobre el declive de su poder. Finalmente, están los indispensables. Éstos si bien poseen cualidades y, por tanto, devienen valiosos para el gobernante, no están parapetados en la escasez, es decir, el gobernante puede echar mano de indispensables alternativos dentro de los intercambiables. Son, apelando a una vieja metáfora, como "tejedores" platónicos de segundo orden o imperfectos. Conforman un entramado y, consecuentemente, funcionan como correa de transmisión entre los intercambiables (los muchos anónimos) y los imprescindibles (los pocos).

P3. Los recursos organizacionales, simbólicos, afectivos, discursivos, etc., resultan vitales para un gobierno; sin embargo, el "dinero" resulta siempre necesario y es un parteaguas para todo gobierno. Sin acceso a él todo gobierno está condenado no sólo al fracaso, sino a una vida breve. El dinero o la "caja" son expresiones del lenguaje común que puede ser sustituidas por conceptos técnicos tales como presupuestos o, más precisamente, por gasto total consolidado. No obstante, siempre estamos hablando de lo mismo: la caja que tiene disponible el gobernante para retribuir de manera diferencial tanto a intercambiables como a los indispensables y, fundamentalmente, a los imprescindibles. Sin dinero resulta imposible conservar y/o acrecentar el poder. Ahora bien, si pensamos los tres grupos como conformando una pirámide en cuya cúpula se encuentra el gobernante, luego los imprescindibles, en el medio los indispensables y en la base los intercambiables, el dinero funge como lubricante que aceita la complicada maquinaría del poder.

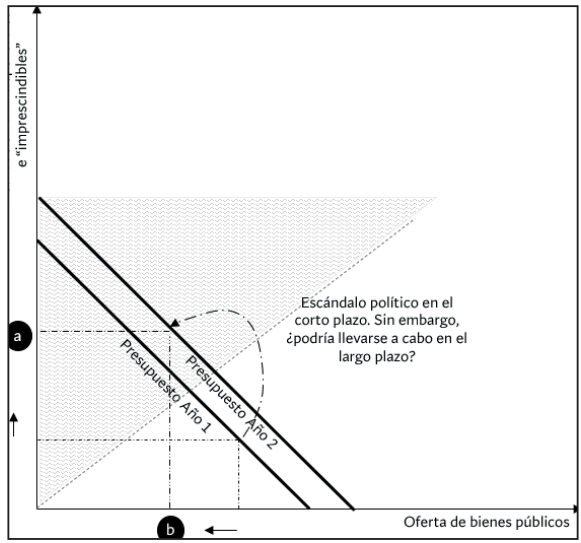
FIGURA 1.



FUENTE: elaboración propia.

La Figura 1 representa la situación esperable y/o deseable para una *poliarquía* competitiva y, a largo plazo, comprometida con la reciprocidad democrática (*responsiveness*) en el sentido propuesto por el profesor Robert Dahl. Los gobernantes pueden gastar todo el presupuesto disponible [1] en bienes públicos [2], aunque, si lo hacen no podrían delegar el poder. Pueden, por otra parte, gastar todo el presupuesto [1] en retribuciones en los imprescindibles y en los indispensables [3] pero dejarían de ofertar bienes públicos, la línea de base requerida para el juicio y evaluación política de los ciudadanos (los intercambiables). Por tanto, los gobernantes saben que tienen que distribuir el presupuesto en algún lugar de la recta. Para ello interpretan el mandato electoral y se figuran un tipo de preferencias electorales [4]. Así destinan una porción relativamente jugosa del presupuesto en la oferta de bienes públicos [7] y el resto [6] en la matriz de pago para los imprescindibles e indispensables. Aquí, de manera especulativa, supongo que la línea 0Z resulta el umbral de tolerancia más bajo para una *poliarquía* (región 5 en la figura). Por encima de ese umbral (región 8) se prefigura una zona no deseable (o vedada) para cualquier democracia, puesto que allí los imprescindibles e indispensables recibirían una matriz de pago superior a la oferta de bienes públicos. Este asunto está representado en la Figura 2, pero como veremos inmediatamente (Figura 3), en política siempre puede haber sorpresas.

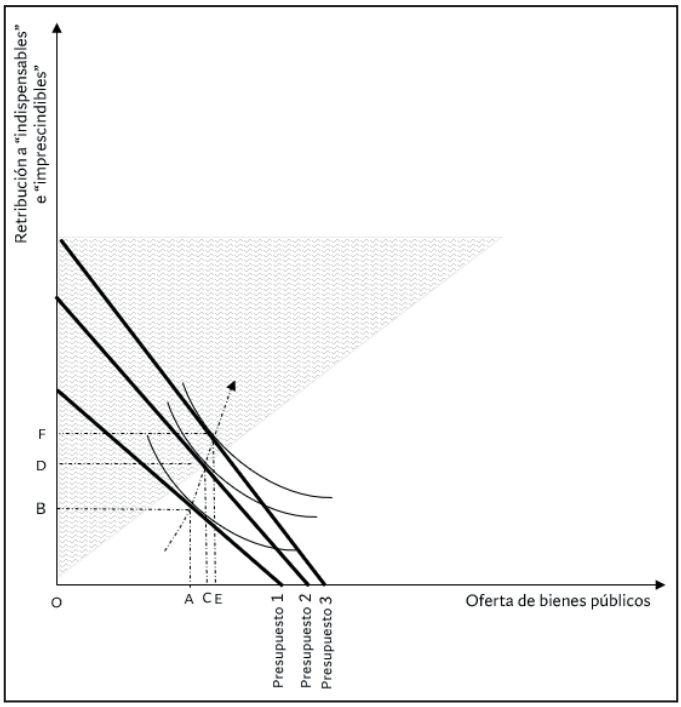
FIGURA 2.



FUENTE: elaboración propia.

La Figura 2 muestra que sería un escándalo que, en un brevísimo período de tiempo, *i.e.* de una elección a otra, la *poliarquía* en cuestión ingresara a la zona vedada, invirtiéndose, por tanto, la matriz de pago. ¿Pero qué pasaría si la *poliarquía* genera este cambio no en un corto plazo sino en un par de décadas? Este asunto se representa mediante la Figura 3.

figura 3.

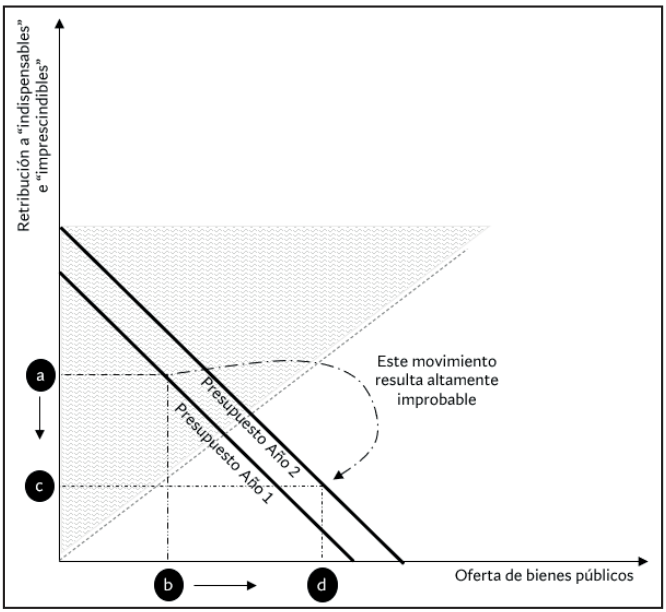


fuente: elaboración propia.

Las diferentes líneas presupuestales [1, 2, 3] representan el crecimiento de la caja que los gobernantes tienen a lo largo del tiempo. Sugiero, para fines expositivos, la idea de que cada presupuesto condensa un quinquenio. Dado que la caja aumenta a lo largo del tiempo, hay garantías para que los intereses de los gobernantes puedan ser satisfechos, todo es miel sobre hojuelas para ellos. Sin embargo, justamente por esa razón, supongamos que durante el pasaje del presupuesto 1 al 2 se registra un encarecimiento de la matriz de pago de los imprescin-

dibles e indispensables. Es decir, como son talentos escasos suben su precio en medio de la expansión, mientras que se abarata la producción y oferta de bienes públicos (para que esto suceda sólo se requiere suponer un contexto levemente inflacionario y con la realización de micro devaluaciones, asunto sobre el que volveré más adelante). Estos cambios en los precios relativos (alteración en la *ratio* de la matriz de pagos) queda reflejado en el cambio de pendiente de las rectas presupuestales. Esto explica cómo resulta posible un sendero de cambio que lleve a la *poliarquía* desde la zona deseable hacia la zona vedada sin que medie ningún cambio en las preferencias electorales, tampoco en la interpretación que hagan los gobernantes de ellas. Ahora bien, una vez que la *poliarquía* se situó en la zona vedada ¿puede regresar a la zona deseable? La pregunta queda retratada en la Figura 4.

FIGURA 4.



FUENTE: elaboración propia.

Una vez que los actores políticos conducen o arrastran el juego democrático hacia la zona vedada (el tránsito lento pero persistente retratado por el sendero

wz de la Figura 3), la *poliarquía* queda atrapada en un *modus vivendi* que sobrevalora el pago a los imprescindibles e indispensables con respecto a la producción y oferta de bienes públicos. Una vez que los actores políticos se sitúan allí, regresar a la zona democrática deseable resulta una verdadera odisea, algo prácticamente inviable e improbable (problema planteado, como se ve, en la Figura 4). ¿Por qué? La razón es muy simple: una cuestión de incentivos que expongo a continuación.

Para traer la *poliarquía* a la zona deseable hace falta una facción política (oposición) que prometa a los intercambiables (votantes) una mayor producción y oferta de bienes públicos. Este asunto se representa en la Figura 4 de la siguiente manera: el actual gobierno distribuye el presupuesto acorde a sus intereses (coordenadas a; b), mientras que la oposición (facción que quiere disputarle el poder al actual gobierno) promete una distribución alternativa (coordenadas c; d). Aquí aparece un primer problema que retrato de la siguiente manera: la actual oposición (la facción que quiere reemplazar al actual gobierno) sabe que para formar una mayoría electoral favorable requiere de los servicios de, al menos, algunos imprescindibles y de muchos indispensables. Por tanto, ¿quiénes entre los imprescindibles e indispensables, apoyaría (o se pasaría) a la oposición (facción alternativa que desea hacerse con el poder) si promete (una vez en el gobierno) reducir *su* matriz de pago y destinar, consecuentemente, el grueso del presupuesto a la oferta de bienes públicos?

Ahora bien, supongamos que por alguna contingencia (p.ej. el carisma del líder opositor, hartazgo en el electorado, un incipiente cambio de *ethos* en algunos indispensables, etc.) la actual oposición logra ganar las elecciones. Inmediatamente enfrentará, tras asumir el gobierno, un problema crucial. Dicha prueba de fuego puede ser puesta como un dilema: o bien el nuevo gobierno cumple la promesa hecha al electorado a costa de no poder conservar y acrecentar el poder, o bien defrauda a su electorado y busca, así, asegurar gobernabilidad para su gobierno. Este dilema se basa en lo siguiente: incrementar la oferta de bienes públicos requiere reducir la paga y/o el número de imprescindibles e indispensables, pero esta decisión le infringe al gobierno (otrora facción opositora) un daño irreversible en términos de acrecentamiento y conservación del poder, ya que la decisión provoca que un número considerable de imprescindibles e indispensables estén dispuestos a mirar con ansiosa avidez a la actual oposición (antes gobierno) para que les vuelva a contratar e incrementar sus primas actualmente exiguas y/o inexistentes. Lo que desencadena, en consecuencia, no sólo el ciclo

de la disputa brutal por el poder, sino un verdadero problema de gobernabilidad para el actual gobierno (la oposición que otrora quería llevar a la *poliarquía* de la zona vedada a la deseable).

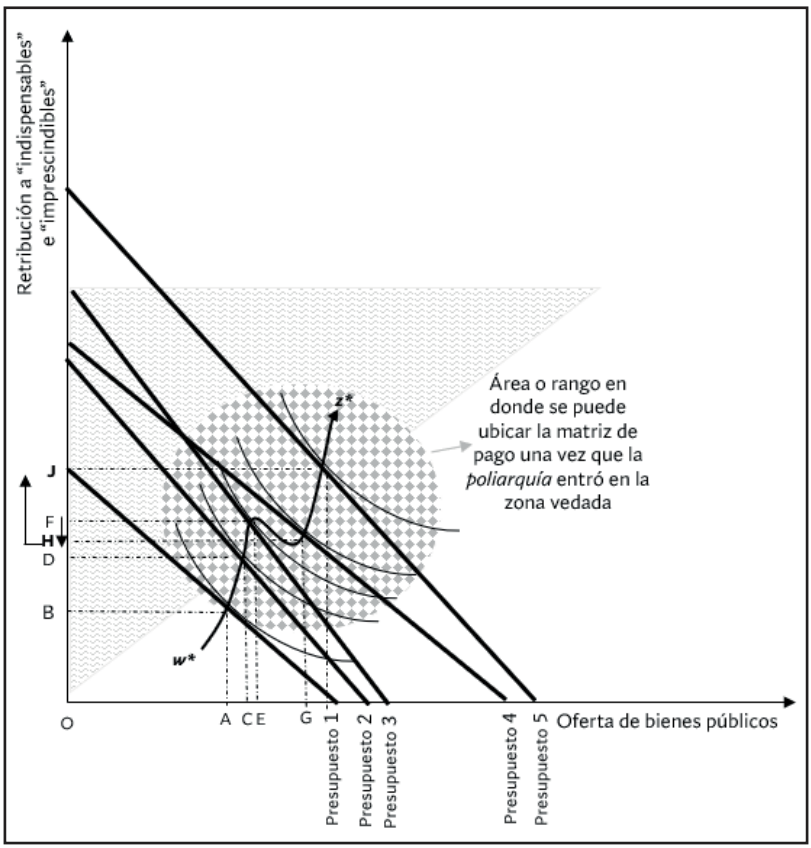
En resumen, la actual oposición (es decir, la anterior facción en el poder) alimentará, en medio de este escenario, la promesa de volver al *status quo* anterior, esto es, donde los imprescindibles e indispensables estaban bien pagados. De esta forma, si el actual gobierno quiere mantenerse en el poder no tiene más remedio que traicionar sus promesas electorales y pagar más de lo que pensaba tanto a los imprescindibles como a los indispensables. Así, la dinámica de los actores políticos genera un campo de fuerza que conduce a la *poliarquía* a la situación precedente, *i.e.* la arrastra al anterior *modus vivendi.* Desandar el sendero *wz* de la Figura 3 puede resultar altamente deseable tanto para algunos políticos como para los ciudadanos, pero, si nos atenemos a la estructura de incentivos imperante, constituye una acción política inviable. Esto quiere decir que una vez que la *poliarquía* se sitúa en la zona vedada, la competencia electoral ya no resulta una herramienta tan eficaz para cambiar el *modus vivendi* creado. No obstante, ante este panorama conviene preguntarse: ¿no es posible que lo que no consigue hacer la competencia electoral lo termine haciendo la irrupción de eventos exógenos al modelo? A continuación, analizo este asunto.

Una vez que una democracia se convierte en una *poliarquía* que funciona en la zona vedada provoca que cualquier intento por desplazarla a la zona deseable desate, por la estructura de incentivos que regulan la compra de lealtades, una empalizada de resistencias cuyas fuerzas la hacen volver a la zona vedada. Aunque, cabe preguntarse, ¿la irrupción de factores exógenos a la estructura de incentivos, p.ej. una crisis, puede romper con las resistencias antes señaladas?

Una alta y persistente inflación, estancamiento o caída del nivel general de actividad, una fuga de depósitos del sistema bancario, deterioro abrupto de los términos de intercambio en la balanza comercial, falta de acceso al crédito externo, reducción de *stocks* de riqueza vía ajuste de precios relativos, etc., la lista de factores exógenos es extensa y combinable de múltiples formas en el corto plazo. En un contexto así resulta atractivo suponer que las promesas de la facción opositora en torno a incrementar los bienes públicos a expensas de la matriz de pago destinada a los imprescindibles e indispensables corra en paralelo, *i.e.* concomitante y sinérgicamente, a la emergencia de una crisis. Así, la probabilidad cierta de un congelamiento o reducción (latente) de la caja sirve para domesticar los apetitos tanto de los imprescindibles como de los indispensables, a la vez que

obliga al gobernante a destinar más fondos a la producción y oferta de bienes públicos con la única finalidad de evitar que la crisis no devenga en una situación de ingobernabilidad estructural. La crisis puede funcionar, eventualmente, como un manto de resignación (temporal) para los principales actores que brindan soporte a la estrategia de acrecentamiento del poder del gobernante de turno.

figura 5.



fuente: elaboración propia.

La Figura 5 muestra lo anterior. Entre el Presupuesto 3 y 4 ha mediado una crisis. Ésta puede ser aprovechada (electoralmente) por la oposición para

promover un incremento en la producción y oferta de bienes públicos y una reducción, por tanto, de la matriz de pago de imprescindibles e indispensables. En efecto, la oposición, ahora en el gobierno, llevará, crisis mediante, la oferta de bienes públicos de E a G (un aumento sustantivo), mientras restringe la matriz de pago de los imprescindibles e indispensables de F a H. Esto muestra que, si bien es difícil que una *poliarquía* desande el sendero *wz* de la Figura 3, no se puede excluir la posibilidad que se verifiquen movimientos parciales que empujen a la *poliarquía* desde la zona vedada a la deseable. Una crisis provoca este tipo de movimientos. Sin embargo, tras la salida de la crisis (el pasaje del Presupuesto 4 al 5 de la Figura 5) el camino de dependencia construido por la estructura de incentivos (cuya tendencia quedó temporalmente desviada por la emergencia de la crisis) obliga a que todos los actores políticos le hinquen el diente al suculento trozo de carne fresca recién servida (incremento presupuestal fruto de la recuperación económica). Así, una vez que una *poliarquía* se encuentra en la zona vedada, es posible que su sendero de estructura de incentivos no tenga la forma pétrea (cuasi lineal) de *wz* (Figura 3), sino que resulte más parecido al sendero *w*z** (Figura 5). Esto permite delimitar a la zona vedada como un espacio de basculación entre ir a la zona deseada (aumentar la oferta de bienes públicos a expensas de la matriz de pago de los imprescindibles e indispensables) y su regreso (un incremento en la compra de lealtades para acrecentar y conservar el poder).

LA DEMOCRACIA ARGENTINA COMO *POLIARQUÍA* EN ZONA VEDADA

Una *poliarquía* en zona vedada es una democracia en donde los gobernantes asignan una parte considerable de la caja a la retribución de lealtades, a expensas, claro está, de una menor oferta (potencial) de bienes públicos. Además, a los gobernantes de turno les resulta muy difícil, con independencia de sus deseos y preferencias políticas, aumentar la oferta de bienes públicos, puesto que su necesidad por conservar el poder los conmina a mantener lo más elevada posible la matriz de pago a los imprescindibles e indispensables por temor, fundamentalmente, que le abandonen y se vayan a colaborar con la facción opositora (es decir, aquella que buscar hacerse, elecciones mediante, con el poder). Una vez que una democracia se asienta en la zona vedada se convierte en una *poliarquía* que tiene enormes dificultades para generar, tomando en cuenta la

oferta de bienes públicos, una sólida base de reciprocidad (*responsiveness*) con la ciudadanía a largo plazo. De modo que utilizo esta definición para afirmar que la democracia argentina encaja o ejemplifica el *modus vivendi* de una *poliarquía* vedada. Antes de avanzar se impone un comentario: el objetivo aquí no consiste en describir cómo y por qué la democracia argentina recaló en una *poliarquía* vedada (asunto que, conjeturalmente, podemos ubicar desde mediados del siglo pasado), sí, en cambio, interesa analizar cómo el funcionamiento democrático en zona vedada resulta terreno fértil para el experimentalismo. Es lo que haré a continuación mediante dos apartados que llevan por título: la "alquimia de las cajas" y "controlocracia" (tomo este término de Ringen 2016, p. 138). Y señalo, antes de avanzar, que ambos asuntos tienen una fuerte interrelación. Lo que sugiere que la separación sólo tiene una finalidad teórica y conceptual.

ALQUIMIA DE LAS CAJAS

En un régimen democrático la oferta de bienes públicos es el resultado de la implementación de políticas, es decir, de experimentos sujetos a protocolos. Dado que una *poliarquía* en zona vedada sigue siendo un régimen democrático, encontraremos en ella políticas orientadas a la producción y oferta de bienes públicos. En ese contexto, no hay razón válida para sospechar que el gobernante de turno no haga el mayor esfuerzo para ofertar bienes públicos (p.ej. salud, acceso a la justicia, seguridad ciudadana, promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho), como así también bienes cuasi públicos (p.ej. educación, ciencia y tecnología, infraestructura, entre otros) e incluso endulzar discursivamente cuestiones redistributivas a secas (p.ej. seguros de desempleo, transferencias monetarias directas a ciertos grupos poblacionales, ampliación del sistema de pensiones, etc.) bajo el paraguas de la etiqueta "bien común" como sinónimo imperfecto de bienes públicos. Así, en una *poliarquía* en zona vedada no sólo existen políticas (experimentos) sujetas a supervisión ciudadana (los protocolos), sino que también hay disponible un horizonte y rendición de cuentas en el quehacer político. Por tanto, los bienes públicos, en tanto experimentos, generan un horizonte político no sólo para los ciudadanos, también baliza la relación entre gobernantes y oposición. La democracia argentina, con sus énfasis y grises, ejemplifica bien este asunto.

Si bien Argentina es un país, algo que resaltan terceros observantes, con una generosa oferta de bienes públicos (en muchos casos más nominal que real, en otros con difícil acceso y mala calidad) no conviene olvidar que se trata de una *poliarquía* en zona vedada, es decir, una democracia en donde imprescindibles e indispensables obtienen una jugosa tajada del presupuesto. La matriz de pago a los "leales" no es otra cosa más que la diferencia entre la oferta de bienes públicos potencial frente a la real. Asunto fácilmente comprensible en términos teóricos, muy difícil de aprehender en términos prácticos o vivenciales. Esta brecha resulta una zona borrosa para el ciudadano corriente; a lo sumo, quizá, un ámbito de sospechas y especulaciones tanto para ciudadanos como para la oposición. En esa área borrosa se echan de menos los juicios cognitivos certeros y, por tanto, todo enunciado con pretensiones de verdad resulta rebatible, de múltiples maneras, en la arena política. Algunos juzgarán al gobierno de cínico o de descarado realismo, pero éste siempre puede admitir en privado (los *off* a la prensa), y hasta asumir en público, que la matriz de pago imperante tanto a imprescindibles como a indispensables resulta necesaria para poder ofrecer el nivel de bienes públicos existente. Es decir, para garantizar cierto horizonte temporal a la democracia. Esto ha sucedido en varios momentos en estas últimas décadas; en efecto, los primeros años del menemismo fueron memorables, pero el anaquel de la historia reciente está repleto de fugaces justificaciones del tipo. La efectividad y el éxito siempre tienen su precio.

Mientras los presupuestos crecen año con año dicha área borrosa no resulta un problema ni para el gobierno, tampoco para la oposición. Esta descripción alcanza la historia argentina reciente. Entre 1992 (con la "Convertibilidad" a toda marcha) y 1998 (efectos negativos de la "crisis del rublo") los presupuestos se incrementaron sustancialmente traccionados, primero, por la venta de activos (ciclo privatizador), luego, como resultado de las altas tasas de crecimiento económico y una formidable modernización del sistema tributario (creación de la Agencia Federal de Ingresos Públicos -AFIP). Por otra parte, entre 2003 (luego de la brutal devaluación y confiscación de depósitos realizada por el duhaldismo) y 2007-2008 (primero, con el gobierno de Néstor Kirchner, luego durante una parte del primer mandato de Cristina Fernández) los presupuestos crecieron aceleradamente como resultado de un nuevo ciclo de altas tasas de crecimiento económico, además de una vuelta de tuerca modernizadora sobre la agencia recaudadora (AFIP). A lo que hay que agregar que tanto en uno como en otro período de crecimiento económico los presupuestos también se engordaron me-

diante la deuda pública, cuyas modalidades y herramientas difieren; pero hay que apuntar que ningún gobierno democrático se priva, por la naturaleza y eficacia cortoplacista en la que se asienta toda democracia, de tomar deuda si puede hacerlo. Así, mientras el ciclo económico está al alza, los presupuestos también y, en consecuencia, la brecha entre la oferta potencial de bienes públicos con la real queda desdibujada tras una densa área borrosa. En medio de ese contexto la *poliarquía* en zona vedada está lejos de la tormenta, y la matriz de pago a imprescindibles e indispensables se ubica fuera del radar ciudadano y de la opinión pública. Sin embargo, la miel que recubre las hojuelas no dura para siempre, porque tras la bonanza sobreviene un período en donde la miel hay que encontrarla entre las espinas. Y en estos casos Argentina es, nuevamente, un buen ejemplo.

Cuando el crecimiento económico y el endeudamiento público no alcanza el gobierno tiene que ingeniárselas para hacer "caja", caso contrario tiene, como ilustra la presidencia de Fernando de la Rúa, vida breve (1999-2001). Los imprescindibles e indispensables mantienen, por saberse talentos políticos escasos, demandas inelásticas en su matriz de pago frente a las variaciones presupuestales. Sólo una crisis de magnitud puede, eventualmente, domesticarlos. Y eso fue lo que pasó cuando la "convertibilidad" saltó por los aires (2001-2002). Pero tras esa domesticación temporal, nuevamente recordaron su condición de potros bravíos cuando los verdes prados reverdecieron (el sistema de "retenciones al campo", primero con el decreto 310 de 2002, luego con la resolución 10 de enero de 2007). De modo que para los "leales" de aquel momento los verdes prados se convirtieron, finalmente, en ese lugar en donde, parafraseando al gran Ortega y Gasset, nada tiene fin, sólo cuando es cortado por el horizonte. Para los imprescindibles e indispensables que surgieron post crisis de convertibilidad no parecía haber límite para sus apetitos, y el primer gobierno kirchnerista no sería, de ninguna manera, un gobierno que pondría límites (fue así como Néstor Kirchner sumo a la lista de "leales" a los movimientos piqueteros, además de otros movimientos sociales). Sin embargo, aún con retenciones y subas de impuestos generalizadas el horizonte finalmente se acercó y el gobierno de Cristina Fernández, antes que sus sucesores, no sólo tuvo que lidiar con la falta de crecimiento, también tuvo que echar mano de la astucia, sin que faltara en ese ingenio una alta cuota de determinación. La lógica del poder se impuso: si quería conservar y acrecentar el poder necesitaba de un gran número de imprescindibles e indispensables, pero también de "caja". Y eso hizo.

Entre 2008 (crisis de las *subprime*) y 2011 (en donde se reeligió Cristina Fernández) la economía argentina tuve un crecimiento raquítico. No obstante, tras la asunción de su segundo mandato las cosas se pusieron peor. Desde 2011-2012 hasta la actualidad, la economía argentina se ha mantenido prácticamente estancada; en efecto, ambos mandatos de Cristina Fernández, así como el de Mauricio Macri y el actual, han tenido que usar la inteligencia para hacerse de "caja". Comencemos con el período de Cristina Fernández, expongo luego la estrategia de Mauricio Macri, finalizo con una breve nota sobre el gobierno de Alberto Fernández.

La alquimia de las cajas consiste en aumentar el presupuesto sacando, para usar una frase bien keynesiana, agua de las piedras, es decir, inventando mediante el ingenio y la astucia una ampliación del presupuesto bajo condiciones de crecimiento raquítico o directamente nulo. El gobierno de Cristina Fernández mostró, para esta tarea, tanto astucia como determinación, es decir, una mezcla necesaria para toda acción política que persiga el éxito. La determinación (estatización y/o nacionalización de empresas, entre ellas el sistema previsional) le permitió aumentar la base (también la paga) de noveles imprescindibles e indispensables (fundamentalmente La Cámpora, pero no exclusivamente), sin necesidad, claro está, de restringir la oferta de bienes públicos. La astucia, en cambio, consistió en abaratar el precio de producción de los bienes públicos (mediante el incremento de deuda pública doméstica, refinanciación de deuda soberana e inflación persistente), asegurándose que la brecha entre la oferta potencial y real de bienes públicos continuara siendo una enorme y densa mancha borrosa tanto para sus electores, la ciudadanía y para gran parte de la oposición.

En 2015 Cristina Fernández le entrega el gobierno a Mauricio Macri con un entramado de "cajas" y matriz de pagos muy enrevesado, pero, además, en un punto álgido de la hipotética senda w^*z^* (Figura 5). Expresado sin estética y con algo de brutalidad: le entrega el gobierno, aunque deja un entramado de imprescindibles e indispensables "leales" bien pagados que pujan al alza por las retribuciones de sus talentos políticos escasos. Entre los "leales" se encuentran: los grupos y sectores empresariales que desean seguir beneficiándose de un sistema complejo y sofisticado de subsidios, empresarios y actores políticos subnacionales que no quieren perder privilegios a través de un intrincado sistema de asignación de obra pública, líderes sindicales con sus históricos sistemas de capturas de rentas; además, claro está, los movimientos sociales con un expansivo sistema de manejo de transferencias monetarias directas; sin olvidar, entre

otros grupos, los "leales" incorporados vía empleo público en la administración central, organismos descentralizados y empresas estatales. La situación era clara: si estos imprescindibles e indispensables no obtenían del gobierno de Macri lo que venían obteniendo, se pondrían en su contra esperando que la oposición retomara el poder en las elecciones de 2019. Lo que, evidentemente, sucedió.

Macri enfrentó esta situación de manera ambigua y titubeante; fue astuto, pero le faltó determinación. Se dio cuenta que necesita, para permanecer y acrecentar el poder, de imprescindibles e indispensables. En el asunto del entramado de subsidios operó políticamente a destiempo, terminó ofuscando a los votantes y perdiendo el apoyo de los empresarios beneficiados con el esquema de subsidios imperante (este tema se conoció como el "ajuste de tarifas"). Para con los movimientos sociales se mostró más astuto, pero la jugada resultó insuficiente. Macri priorizó el pago a imprescindibles e indispensables relacionados con la gestión de los movimientos sociales (el jugoso presupuesto destinado a lo que se conoce en Argentina como "planes sociales" que por estos momentos son un verdadero dolor de cabeza para el actual gobierno), pero dicha decisión resultó ineficaz puesto que la llevó adelante en medio de un ajuste de las cuentas fiscales, con lo cual resintió la producción y oferta de bienes públicos, decisión que se hizo notar en la arena electoral de 2019. El hábitat del "empleo público" se asumió como una batalla perdida de antemano. En conjunto Macri se dio cuenta que tenía que priorizar la gobernabilidad, es decir, lograr mantenerse en el poder. Algo que el mismo reconoció al final de su mandato y sigue planteándolo como un logro: ser el primer gobierno (contemporáneo) no peronista en terminar el mandato presidencial. Aunque conservar el poder significó un incrementó exorbitante de deuda externa soberana. El "gradualismo" (así se conoció en Argentina la política llevada a cabo por Macri) no significó otra cosa más que intentar pagar lo más posible a imprescindibles e indispensables sin gozar plenamente de su colaboración. Estos actores ya habían decidido apoyar a la oposición kirchnerista y esperar que la promesa de una nueva matriz de pago se hiciera realidad. Evento que tuvo que enfrentar el cuarto gobierno kirchnerista tras su asunción en diciembre de 2019.

Cuando la fórmula Fernández-Fernández (la expresión de experimentalismo más audaz, también más peligroso de la historia argentina contemporánea) llegó al poder, las demandas de los imprescindibles e indispensables no se hicieron esperar. Ni siquiera la pandemia las aletargó; quizá, no hizo otra cosa más que potenciarlas. En un país sin acceso al crédito externo las necesidades

de "caja" recayeron en tres áreas, todas expoliadas a la vez, aunque con diferentes ritmos y énfasis. Primero, la colocación de deuda local mediante letras de la tesorería (conocidas en Argentina como "Leliqs"). Una herramienta utilizada en exceso bajo la administración de Macri que el actual gobierno llevó al éxtasis. Segunda, la suba de impuestos y la creación de nuevos tributos: el más conocido a nivel internacional es a las grandes fortunas, pero lo relevante son aquellos que afectan a los trabajadores y a la clase media, principalmente el impuesto inflacionario. Tercero, la emisión monetaria a ritmos descontrolados en los dos últimos años. El gobierno actual mantiene una carrera imposible: usa la emisión monetaria para pagar a "leales". Una carrera despareja que apuesta sólo a lo discursivo, que palabras más o menos, puede sintetizarse del siguiente modo: ⍰ "si regresa Macri y sus secuaces la pasarán peor". Asunto que los imprescindibles hoy mejores pagos repiten como mantra. En la actualidad, sin embargo, según estudios demoscópicos, el área borrosa se va pareciendo más a manchas, delineándose en ellas figuras que atraen negativamente la atención de los públicos ciudadanos. Asunto que indica cierto nivel de hartazgo ciudadano.

CONTROLOCRACIA

Cuando el gobernante de una *poliarquía* en zona vedada enfrenta problemas presupuestales, como resultado de la falta de crecimiento económico, está compelido a usar la imaginación (esa especie de alquimia) para hacerse de "cajas" *so pena* de perder el apoyo de "leales" o prepararse en caso contrario, dada la inevitable reducción de la oferta de bienes públicos, para un castigo electoral; *in extremis* ambas cosas a la vez. En este contexto, hacerse de "cajas" no es una opción, es una necesidad guiada por la lógica de la sobrevivencia política. En esas coyunturas los observadores concentran, quizá al influjo de sesgos cognitivos, sus miradas y atención en las operaciones de gran envergadura y calado político (estatizaciones, nacionalizaciones o confiscaciones); no obstante, la mayoría de las veces hacerse de "caja" implica realizar operaciones quirúrgicas localizadas (establecer exenciones impositivas, subsidios focalizados, regulaciones preferenciales, la lista es extensa y elástica en función de la imaginación que posea el gobernante) y relativamente efectivas. A esta modalidad la denomino *controlocracia.*

Una de las primeras medidas que tomó Cristina Fernández tras asumir su segundo mandato fue disponer de un control de cambio, asunto conocido localmente como "cepo al dólar". Argentina tiene una historia casi centenaria de controles de cambio (*grosso modo:* fijar precio implica racionar cantidades), aunque el período que abre la decisión de Fernández sirve para ilustrar la relación estrecha entre hacer "caja" y la *controlocracia*. Relación que usaré al final de este acápite para resaltar la cuestión del experimentalismo argentino contemporáneo.

El primer asunto que hay que resaltar en esta historia es que el control de cambios no es una decisión política para hacerse (directamente) de caja. La astucia de la medida radica en que el control de cambio resulta un mecanismo necesario para que el gobierno pueda seguir utilizando cajas existentes sin necesidad de recortar la oferta de bienes públicos. Lo más evidente de esta medida se manifiesta en dos frentes: primero, el retraso cambiario permite que los asalariados se lleven una mayor porción sobre el excedente del consumidor, es decir, mantiene el poder de compra de los asalariados; segundo, regula políticamente la importación de insumos y bienes finales. Este pequeño pero crucial experimento condujo, inmediatamente, al gobierno a una serie interminable de otros.

La regulación política de las importaciones condujo a la implementación de las famosas DEJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación). La por entonces todopoderosa Secretaría de Comercio Interior estaba a cargo de esta herramienta regulatoria, ya en el límite discrecional, y construyó, así, vía una red de micro controles, una argamasa cuyos componentes principales fueron los controles de divisa (cuotas de importación) y estrategias de comercio (créditos, subsidios, promoción de productos, etc.). Este nuevo experimento, suspendido transitoriamente por un par de años durante el gobierno de Macri, pero retomado cuando le sobrevino la crisis de la deuda, dio lugar, durante los últimos años de la gestión de Cristina Fernández, a una situación verdaderamente asombrosa: desde la perspectiva del consumidor había muchos productos de consumo que eran más baratos al pagarlos en cuotas que en efectivo.

Aquello que comenzó a principios de la década pasada como un experimento aislado hoy se ha convertido en un sofisticado sistema de controles, reglamentaciones y normativas que involucra no sólo la existencia de más de una docena de precios oficiales de las divisas, también una parálisis en el sistema de importaciones. Antes de llegar a esta situación de desabasto de carácter y naturaleza, por ahora, intermitente, el gobierno de Fernández debutó con una ley (Solidaridad Social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública,

Ley 27541) que profundizó y consolidó el control cambiario. A través de dicha norma se creó el Impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social (conocido como impuesto PAIS), nomenclatura de tipo soviético utilizada para designar la implementación de nuevos controles a (viejos) controles que a su vez se usan para controlar otros, de modo que se encuentran, transitoriamente, a la espera de otros nuevos. Aquel experimento iniciado en octubre de 2011, y que formalmente involucraba al Banco Central con la creación del Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, culminó casi una década más tarde en una maraña de controles que arrastran a los ciudadanos a la ilegalidad, asunto que el gobierno promueve con descaro e impudicia por medio del cupo a la compra legal de divisas y que para cumplir la función de ahorro (o, en su defecto, demanda precautoria) deben convertirse en pesos pasando por la dimensión del atesoramiento (es decir, por fuera del sistema legal).

Resumo para pasar a las conclusiones.

En los párrafos previos no he afirmado que la *controlocracia* sea algo privativo de la democracia argentina. Lo que sí afirmo es lo siguiente: una vez que la *poliarquía* se encuentra en zona vedada y padece de problemas presupuestales, el gobierno está conminado a "hacerse de cajas". En ese contexto la *controlocracia,* en tanto implementación quirúrgica y aislada, encuentra un terreno fértil para su desarrollo. Se vuelven, exagerando un poco la descripción, mutuamente dependientes. Encuentra una en la otra una justificación para seguir expandiéndose. Los primeros años del gobierno de Mauricio Macri ilustran por la negativa la descripción anterior.

Macri llega al poder confundido, ya sea porque sus votantes estaban ofuscados o porque él terminó desorientando a sus votantes (algo similar ya había pasado antes con la llegada al poder de la dupla Fernando de la Rúa - Carlos Alberto Álvarez). Lo crucial es lo siguiente: Macri creyó (al igual que una gran parte de la opinión pública lo sigue haciendo) que la corrupción y la alquimia de las cajas era una y única cuestión. Este es un error cognitivo con enormes consecuencias prácticas. Tan usual como este otro: refundir en la misma dimensión el asunto de la alquimia de las cajas con el clásico problema del financiamiento de la democracia (clásicamente presentado como dinero y democracia). Macri

creyó, al parecer, que una lucha contra la corrupción aplacaría el asunto, siempre emergente, de la alquimia de las cajas. El duro banco de la realidad (el sillón de Rivadavia) lo ató a la cuestión política impostergable: no se puede gobernar sin un mínimo de imprescindibles e indispensables y, para ello, hace falta dinero (cajas). Y la alquimia de las cajas no sucede (y no puede ocurrir) en la sombra; acontece, en cambio, bajo la brillante luminaria que otorga el Boletín Oficial de la República Argentina. A diferencia de lo que creyó Macri y sus seguidores (y de lo que cree actualmente la oposición) el mayor problema que enfrenta la democracia argentina (en tanto *poliarquía* en zona vedada) no es la corrupción, sino el férreo y consolidado entramado legal creado para facilitar y brindar soporte a la matriz de pago (inelástica) tanto de imprescindibles como de indispensables. No niego que la corrupción representa un problema medular en la política argentina; afirmo, en cambio, que tiene una naturaleza diferente al problema de hacerse de cajas. El asunto que aquí se retrata no tiene que ver con aquello que se hace al margen de la ley (parafraseando la tesis del profesor Carlos Santiago Nino), sino con aquello que se hace al cobijo de la norma. Para decirlo sin rodeos: la *controlocracia* permite encerrar la vaca (identificar las cajas) y su ordeñe produce leche incluso para su consumo interno. Así, la *controlocracia* requiere cada vez más recursos para manejar eficazmente los dispositivos normativos que permiten la permanencia de los "leales". Lo que implica que una *poliarquía* en zona vedada construye un *status quo* duro de roer, incluso (o fundamentalmente) para las "almas bellas".

Concluyo. No he afirmado que Argentina sea la única *poliarquía* en zona vedada, tampoco que sea la única democracia asentada sobre una poderosa *controlocracia*. Lo que sí he afirmado es que cuando una *poliarquía* en zona vedada con problemas presupuestales tiene que echar mano (de forma descontrolada) del poder milagroso de la *controlocracia* aparece (o se prefigura) lo que aquí di en llamar experimentalismo. Todo indica que ubicados en este terreno la democracia argentina resulta un candidato paradigmático.

A la *controlocracia* le fascinan los experimentos, se podría decir que esa es su esencia. Los controladores (los individuos que habitan la *controlocracia*) tienen la tarea de experimentar para hacer caja. Su accionar no está guiado por los protocolos mencionados en la introducción, pueden equivocarse y, por tanto, enmendar sus errores de cálculo con nuevas regulaciones. Estos experimentos de experimentos (regulaciones que regulan lo ya regulado a la espera de nuevas regulaciones) no tienen nada que ver con la idea, muy usual en ciertos públicos

ciudadanos, de políticos y *policy makers* ineptos o atrapados en la neblina de la incuria. Aunque esto último pueda ocurrir (nunca hay que descartar impudicia y desidia generalizada), lo importante aquí es comprender que los controladores están todo el tiempo ensayando (y reensayando) experimentos que serán corregidos por otros, mientras los malos resultados resultan cubiertos (políticamente hablando) por la red de imprescindibles e indispensables. Mientras estos hagan bien su trabajo los efectos nocivos del experimentalismo (experimentos corregidos por otros mientras se está a la espera de los resultados del actual) quedarán, también, al igual que la brecha entre la oferta potencial y real de bienes públicos, en un área borrosa para el gran público de los intercambiables.

El experimentalismo, como aquí se ha definido, resulta comprensible a través de la idea de redes de pequeños experimentos que sólo tienen valor y relevancia política en el contexto de la alquimia de cajas. Tienen una existencia independiente de las políticas orientadas a ofertar bienes públicos. Cuando el experimentalismo consume todas las energías políticas del gobierno, ya no hay suficiente disponibilidad de empuje para traccionar la oferta de bienes públicos. El gobierno, en esa situación, ha quedado atrapado en la lógica del experimentalismo y su quehacer: hacerse de cajas. El poder pierde horizonte y capacidad transformadora y su contracara resulta el descontento ciudadano.

El experimentalismo no explica por qué la democracia argentina entró en una zona vedada; sin embargo, sí ayuda a comprender por qué razón le resulta muy difícil a cualquier gobierno salir de ella. El experimentalismo muestra dos cosas más: salir de la zona vedada no es tarea de buenas consciencias (hasta los santos quisieran salir huyendo de esa situación, parafraseando al gran Alexander Pope), tampoco de domesticación de apetitos individuales (quizá ningún Ulises amarraría su barco en el puerto de Buenos Aires). Es un asunto de lucha política y, en consecuencia, aquí el análisis cesa y queda a la espera del desenlace de los acontecimientos.

CONCLUSIONES. EL EXPERIMENTALISMO ARGENTINO: TRES ANOTACIONES ACTUALES.

He ofrecido un modelo teórico y analítico con la finalidad de dotar a los análisis de coyuntura con una herramienta alternativa. En este sentido, concluyo con la presentación de tres asuntos que involucran al experimentalismo y resul-

tan, a mi juicio, vitales para el futuro en la democracia argentina. Los enuncio y, luego, los desarrollo brevemente: redistribución sin crecimiento, la ambigua construcción de las libertades individuales y la existencia de la oposición al interior del gobierno.

1. Argentina no es la única sociedad que tiene problemas de crecimiento, pero sí es una de las pocas que se empecina en redistribuir sin crecer. Lo anterior no es un juicio de valor, es una proposición verificable. La cuestión del crecimiento resulta un asunto lo suficientemente serio para que economistas alejados del *mainstream* le presten atención. Tal es el caso del profesor Piketty. En su *best-seller* intitulado *El capital en el siglo XXI* muestra que aún con bajas tasas de crecimiento, pero persistentes en el tiempo, el capitalismo es capaz de generar una buena amortiguación ante los problemas de la distribución de ingresos (y, podría añadir, en la producción y oferta de bienes públicos de calidad). La clave del crecimiento no está tanto en la tasa sino en la persistencia (con sorna, se podría etiquetar como "el milagro del interés compuesto"). En las últimas cuatro décadas, Argentina muestra un comportamiento de la tasa de crecimiento del producto interno bruto en forma de serrucho, aunque en la última ni siquiera eso. Desde el inicio del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández hasta la actualidad la economía argentina está, prácticamente, estancada. No obstante, las demandas redistributivas se multiplicaron en todas las direcciones. Lo que interesa destacar aquí no son las causas por las que Argentina tiene dificultades para crecer (seguramente, el hecho de que la democracia argentina esté en zona vedada tiene mucho que ver en ello, pero ese análisis excede los límites de esta presentación), tampoco la legitimidad de las diferentes demandas redistributivas (es muy probable que la matriz de pago a los "leales" produzca efectos en este terreno), sí, en cambio, presentar dos tópicos que emergen con fuerza en la convergencia de ambos fenómenos en el plano del experimentalismo.

Primero. Si la democracia argentina sigue su trayectoria o sendero en la zona vedada resulta altamente probable, la historia así lo sugiere, que el crecimiento económico corra por detrás de las demandas redistributivas. Con lo cual el crecimiento económico lejos de sacar a la democracia argentina de dicho sendero, la termina atrayendo, es decir, reforzando el *modus vivendi* como *poliarquía* en zona vedada. Este asunto nos lleva al próximo tópico.

Segundo. ¿La actual situación de falta de crecimiento y demandas redistributivas tendrá impactos (y de qué tipo) en el actual diseño institucional de la democracia argentina? ¿Las demandas redistributivas en un contexto de estancamiento producirá una crisis que sacudirá el sendero inercial de la matriz de pago de "leales"? ¿El actual diseño tiene margen para absorber las demandas redistributivas o mutará, afectando dicho cambio los fundamentos estructurales de la actual democracia? Lo último conecta con la siguiente problemática.

2. Para terceros observantes, Argentina es, ante todo, una sociedad de contrastes. El mismo áspero tañer de los palos de la política -para usar la siempre actual provocación weberiana- es capaz de producir decisiones y políticas de vanguardia, al tiempo que se pierde en el más oscuro laberinto de su retaguardia. Argentina es ese país que promulgó tempranamente el matrimonio igualitario, pero se empecina, al mismo tiempo, en mantener privilegios para el sindicalismo corporativo. La sociedad política argentina, tras una larga discusión pública y parlamentaria, promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero es la misma sociedad política que padece impertérrita la existencia de un férreo control de cambios con más de una docena de precios para las divisas. Argentina es esa sociedad que, recientemente, aprobó una normativa de cupo de género para la constitución de sociedades, pero el mismo gobierno que impulsó aquella medida pregona, casi al mismo tiempo, la necesidad de nacionalizar el comercio exterior. El mismo gobierno que sancionó la opción "no-binario" para la emisión de los documentos de identidad, se opone, sin embargo, a la modernización y transparencia del sistema electoral federal. El mismo Congreso argentino que hace unos meses, nomás, aprobó la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal se niega, sistemáticamente, a reformar la actual ley de alquileres que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios.

Lo anterior es una enumeración preliminar, lejos está de ser una caracterización exhaustiva, pero sí muestra la existencia de un contraste crucial: la democracia argentina ha desarrollado un doble estándar (o, al menos, dos vías diferentes) para evaluar y promocionar los derechos individuales y sus agendas. Por un lado, los actores políticos relevantes de la democracia argentina parecen estar comprometidos y promocionan una agenda de libertades individuales en el sentido clásico de neutralidad valorativa sobre los planes de vida que cada individuo elija para sí; por otro, en cambio, la democracia argentina sigue caracterizando

(promoviendo y protegiendo en los actos) las libertades como prerrogativas de grupos, es decir, como privilegios. Y aunque sobre este asunto Argentina no se diferencie mucho de lo que acontece en otras sociedades contemporáneas (desafíos a la validez del ideario liberal sobre la agenda de libertades individuales), lo cierto es que los que habitan la democracia argentina no pueden escamotear la siguiente pregunta: ¿podrá la democracia argentina, en tanto *poliarquía* en zona vedada, utilizar los servicios de imprescindibles e indispensables para hacer converger la doble vía existente en la agenda de libertades individuales o, en cambio, el experimentalismo resulta parte activa del actual proceso de divergencia?

3. La frase que señala que sin oposición no hay democracia no es del todo incorrecta, pero es esquiva y, en cierto modo, imprecisa. Si asumimos que a nivel de lo político siempre hay conflicto y posturas irreconciliables, lo que promete la democracia (en tanto forma de gobierno) es transformar la rivalidad entre las facciones en un juego siempre abierto entre gobierno y oposición. Así, no es la existencia de la oposición lo que garantiza la democracia, sino el juego que esta abre es lo que legitima la existencia de la oposición en tanto facción que espera (cumplimiento de reglas mediante) convertirse (en el futuro) en gobierno. Y, como presenté oportunamente, una *poliarquía* en zona vedada no puede escapar al imperio de esta premisa básica de funcionamiento.

Muchos politólogos e historiadores han mostrado cómo los gobiernos, en muchas ocasiones, quieren cubrir todo el juego democrático, es decir, gobernar y ser oposición al mismo tiempo. La historia política argentina ilustra con creces este medular asunto. Aunque el 18 de mayo de 2019 Cristina Fernández a través de un video-tuit inauguró una nueva etapa en esta larga historia. Mediante la tan resonada frase "[L]e he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos […]" la actual vicepresidenta de la nación prefiguró un escenario inédito para la historia argentina.

Ese pequeño pero brutal experimento llevó a un nuevo nivel la capacidad de un gobierno de ser al mismo tiempo oposición. Este asunto fue advertido oportunamente por muchos, pero, sin embargo, pocos repararon en sus peligros inminentes: unas próximas elecciones presidenciales (en 2023) en donde el partido en el gobierno se presentará como opositor. Ese futuro que, actualmente, se vislumbra y anuncia a través de voceros del gobierno se asienta sobre la arena abrazante del desierto. Asunto descarnado que se puede expresar mediante una

broma: la democracia argentina esta guiada por un piloto automático, pero ningún ciudadano sabe dónde está localizado ese artefacto. De modo que la amplia mayoría de los ciudadanos en Argentina esperan un milagro, pero todos saben que Dios no cumple milagros por encargo (aunque los creyentes se encuentren en el desierto y en medio de un simún).

Concluyo. El deterioro institucional en Argentina es severo, empezando por el socavamiento al rol atribuido del primer mandatario, lo que conmina a que diferentes públicos que componen la opinión pública argentina se pregunten si el experimentalismo no ha llevado sus experimentos demasiado lejos, tanto que está poniendo en duda no sólo el funcionamiento democrático, sino su diseño estructural. Mientras tanto, las facciones en pugna se preparan para cruzar el desierto, haciendo cálculos para saber dónde se encuentran los oasis. De cara a la pugna electoral del próximo año todos se preparan para llevar velas al altar de los buenos deseos. Tampoco faltan las promesas grandilocuentes, los grandes acuerdos y, en extremo, las refundaciones. Sin embargo, todas las facciones saben que en el torbellino del experimentalismo lo más difícil es, parafraseando a Michael Oakeshott, mantener o cuidar los pequeños y frágiles acuerdos. De cara al futuro todo el arco político prometerá crecimiento económico; aunque, resultaría más prudente, que se preparen para enfrentar más demandas redistributivas. Nadie, durante la friega electoral, ignorará la agenda sobre los derechos individuales, aunque pocos se preguntarán, llegado el caso, cómo y a qué precio hacerlas converger. En este escenario no hay que pasar por alto que el gobierno, en su faceta opositora, afirma (y lo seguirá haciendo) que solo él está en condiciones de pagar satisfactoriamente (y, por tanto, conseguir) "leales". En consecuencia, a la (otra) oposición no le quedan muchas alternativas, sólo mascullar frente a los *sets* televisivos. El año que viene será de altares, velas y, fundamentalmente, de muchas promesas a viejos y, también, a nuevos "leales". Una *poliarquía* en zona vedada es, como ya afirmé, un hueso duro de roer. Hoy más que nunca.

RECEBIDO em 18/11/2022
APROVADO EM 15/12/2022

BIBLIOGRAFÍA

Avaro, Dante. 2020. *Democracia y Dinero. O cómo morigerar la mala influencia del dinero en la política comprando un billete de lotería durante el proceso eleccionario*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Bueno de Mesquita, Bruce, and Alastair Smith. 2013. *El manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre buena política*. Translated by María Condor. Madrid: Siruela.

Bueno de Mesquita, Bruce, Alastair Smith, Randolph M. Siverson, and James D. Morrow. 2003. *The Logic of Political Survival*. Boston (Mass): MIT Press.

Dahl, Robert. 1972. *Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven (NJ): Yale University Press.

Freund, Julien. 1968. *La esencia de lo político*. Translated by Sofia Noël. Madrid: Editora Nacional.

Groys, Boris. 2005. *Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural*. Translated by Manuel Fontán del Junco. Valencia: Editorial Pre-Textos.

Latour, Bruno. 2004. "'Von "Tatsachen" Zu "Sachverhalten". Wie Sollen Die Neuen Kollektiven Experi-Mente Protokollier Werden?'" In *Kultur Im Experiment*, edited by Schmidgen, Henning., Geimer, Peter., Dierig, Sven., Alt, and Casey., 17–36. Berlin: Kadmos.

Przeworski, Adam. 2010. *Qué esperar de la democrcia. Límites y posibilidades del autogobierno*. Translated by Stella Mastrangelo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Ringen, Stein. 2016. *The Perfect Dictatorship. China in the 21st Century*. Hong Kong: Hong Kong University Press.